



Experiencias colectivas desde una perspectiva de justicia socioambiental en Caquetá

Fecha de recepción: 3 de marzo de 2025 - Fecha de aprobación: 15 de septiembre de 2025

Tania Loreth Sánchez Prieto¹

Lilian Andrea Barrios Polania^{2**}

Juan Felipe Correa Segura^{3***}

Resumen

La situación de conflicto armado en Caquetá ha generado un contexto desfavorable, con hechos de desaparición forzada, cultura del narcotráfico, tráfico de drogas, homicidios y violencia sexual, que para su población han supuesto un estigma y han reforzado ideas sobre las violencias allí presentes. Sin embargo, en el departamento existen varios actores sociales que buscan la justicia socioambiental, la armonía entre las comunidades, así como la diversidad política y la equidad de género. Este artículo tiene como objetivo analizar y visibilizar las experiencias colectivas de las organizaciones sociales de base (OSB), que constituyen una respuesta pacífica a las diversas problemáticas que afronta el territorio; Además, figuran como un sector de la población que convive con múltiples dificultades, pero que, a pesar de ello, se organizan y quieren contribuir a la justicia socioambiental, haciendo de Caquetá un escenario de oportunidades para la gobernanza. Este documento se estructura a partir de una aproximación al contexto histórico del departamento ya las OSB desde una perspectiva de gobernanza, de un acercamiento a experiencias significativas y de reflexiones generales frente a lo expuesto. Se espera que este artículo logre visibilizar procesos liderados por las OSB que trabajan desde la gobernanza, con una perspectiva ambiental, y que sitúan al territorio ya las OSB como artículo.

Palabras clave

Desarrollo; equidad; gobernanza; justicia socioambiental; organizaciones sociales de base.

¹Filósofa y especialista en pedagogía, magíster en desarrollo, alternativo, sostenible y solidario. Docente del Programa de Filosofía, UNAD. Correo electrónico: tania.sanchez@unad.edu.co ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8932-4586>

^{2**}Comunicadora social y periodista, magíster en comunicación, desarrollo y cambio social. Docente de la Unidad SocioHumanística, UNAD. Correo electrónico: lilian.barrios@unad.edu.co ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2230-3275>

^{3***}Sociólogo, magíster en estudios políticos e internacionales. Docente de la Unidad SocioHumanística, UNAD. Correo electrónico: juanf.correa@unad.edu.co ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-6487-2257>

Abstract

The armed conflict in the department of Caquetá has generated an adverse context characterized by forced disappearances, the culture of drug trafficking, the illicit drug trade, homicides, and sexual violence. For the local population, these dynamics have created stigma and reinforced perceptions of the various forms of violence present in the region. Nevertheless, Caquetá is also home to several social actors who advocate for socio-environmental justice, community harmony, political diversity, and gender equity.

This article aims to analyze and highlight the collective experiences of grassroots social organizations (OSB, by its Spanish acronym), which constitute a peaceful response to the multiple challenges faced by the territory. Moreover, these organizations represent a segment of the population that, despite coexisting with numerous difficulties, continues to organize and strive to promote socio-environmental justice, positioning Caquetá as a space of opportunity for governance.

The paper is structured around three main sections: an overview of the department's historical context and of the grassroots social organizations from a governance perspective; an examination of significant experiences; and a set of general reflections on the findings presented. Ultimately, this article seeks to bring visibility to the processes led by grassroots social organizations that work within a governance framework and from an environmental perspective, situating both the territory and these organizations as key agents in the pursuit of socio-environmental justice.

Keywords:

Development; equity; governance; socio-environmental justice; grassroots social organizations

Introducción

La gobernanza desde las OSB responde a los contextos de cada región o territorio donde operan. Estas se han convertido en objetos de investigación por sus aportes a los procesos de intervención en la gestión territorial y al desarrollo de la justicia socioambiental, como también por su papel como escuelas de formación para la vida, en particular en escenarios donde han existido hechos de conflicto.

El presente artículo se centra en la gobernanza de las OSB como forma de incidir en los territorios a partir de la gestión y la organización del territorio. Estas se conciben como un colectivo en el que se fortalecen las capacidades de los pobladores de Caquetá, quienes contribuyen a la justicia socioambiental y al desarrollo de la región.

A continuación, se presenta el contexto sociohistórico del departamento de Caquetá, donde se describen ampliamente los procesos políticos, sociales, económicos y de conflicto armado que han acompañado este territorio a lo largo de los años. Luego, se expone una conceptualización y reflexión sobre la gobernanza a partir de la acción de las OSB.

Conflictos armados y organizaciones sociales de base

Posteriormente, se abordan dos experiencias significativas de las OSB que dan cuenta de los procesos que diferentes actores de la región dinamizan y aportan a la gobernanza con una perspectiva ambiental, situando a las OSB en la gestión y el desarrollo territorial. Por último, se presentan las reflexiones finales de las experiencias colectivas sobre la gobernanza y la participación comunitaria.

El departamento de Caquetá es un territorio construido por colonos, pobladores que migraron en busca de mejores condiciones de vida. A finales del siglo XVII, Caquetá se convirtió en un territorio estratégico para la extracción de caucho, quina y madera. Fue en el siglo XIX cuando se transformó en uno de los reasentamientos más importantes, donde las familias campesinas que llegaban de los departamentos del Huila, Tolima y Valle del Cauca se emplearon en actividades de extracción de estos productos.

Al finalizar este auge,

hacia 1920, varias de estas familias iniciaron a poblar las tierras, lo que inició la historia de la colonización campesina de las tierras del Piedemonte Amazónico, generando la guerra entre Colombia y el Perú en 1932, donde muchos de los ejércitos que llegaron a pelear se asentaron en las tierras, y con la creación de dos vías de acceso por los departamentos del Huila y el Putumayo, permitieron el ingreso de nuevos colonos. (García y Santanilla, 1994, p.23)

Durante 1950, en tiempos de la guerra bipartidista, esta migración de pobladores había aumentado, y familias enteras que veían vulnerados sus derechos en otras regiones del país decidieron refugiarse en la periferia caqueteña en busca de condiciones de una vida digna (García y Santanilla, 1994).

En 1981, surge el apogeo de la coca, una planta que los pueblos indígenas utilizaron para sus rituales y medicina tradicional. Sin embargo, esta pasó a tener un gran valor económico ilícito en Caquetá debido a sus considerables ganancias en la producción de cocaína a partir de la hoja de coca. Este

acontecimiento convirtió al territorio en el sitio ideal para "hacer dinero." "Mientras los colonos de los años sesenta llegaban al Caquetá para quedarse y vivir, estos nuevos [colonos] lo hicieron con fines lucrativos de hacer solo plata" (Jaramillo et al., 1989, p. 3). Estos aspectos históricos han estado ligados a procesos políticos, sociales, económicos y de conflicto que han acompañado al territorio caqueteño desde la década de los sesenta hasta el 2000, con la presencia de grupos armados al margen de la ley.

En consecuencia, y como lo asegura la Fundación Ideas para la Paz,

para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), estos departamentos, y especialmente Caquetá, tienen varias connotaciones, en lo histórico y lo político, por haber sido el lugar donde se creó y consolidó el Bloque Sur, además de haber sido donde se refugiaron los principales comandantes del Secretariado. (2014, párr. 2)

En efecto, esto representó, desde 1980, un escenario para las actividades vinculadas con el narcotráfico, ya que se convirtió en un medio de financiación para este grupo armado.

Entre 1998 y 2014 se presenta la escalada del conflicto en Colombia, y es en el 2002 cuando se presenta el pico más alto de violencia. En los siguientes años, se observa un descenso bastante fuerte de la violencia dentro del conflicto hasta llegar a sus puntos más bajos en aproximadamente el 2012 (Calderón Rojas, 2016).

En el caso del departamento de Caquetá, se presenció la llegada de otros grupos armados, como el Bloque Central Bolívar y las Águilas Negras, con la intención de controlar el territorio por el negocio del narcotráfico y el comercio de drogas, lo que agudizó diferentes situaciones asociadas con el conflicto armado y posicionó al departamento como un caso emblemático para el desarrollo de programas de recuperación territorial gestionados por los gobiernos nacionales de estos años. Esto trajo como consecuencia un impacto humanitario significativo en relación con las tasas de homicidio, secuestros, extorsiones, reclutamiento de menores, desplazamientos forzados y afectación por minas antipersonal, en el que se superaron promedios nacionales, y se afectó fuertemente a la población civil (Fundación Ideas para la Paz, 2014).

En 2016 se firmó el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, con el que se buscaba cerrar el conflicto armado interno que afectó al territorio nacional, y cuyo propósito era dar fin a un capítulo del conflicto armado interno que, durante más de seis décadas, produjo violencia e inestabilidad a lo largo y ancho del territorio nacional (Gobierno de Colombia y FARC-EP, 2016). De alguna manera, este proceso representó un hecho histórico para el país, ya que permitiría mejorar la compleja realidad en torno a la constante violación de los derechos humanos y las condiciones de vida.

Asimismo, el acuerdo de paz tuvo otras implicaciones que no fueron tenidas en cuenta. Un ejemplo de ello es que algunas zonas controladas por las FARC pasaron a estar intervenidas por grupos armados organizados en lugar del Estado. Ello ocasionó que las restricciones sobre la deforestación y el control ambiental en ciertos territorios dieran paso a una estrategia de deforestación sistemática, a fin de tener más tierra para cultivos ilícitos, crear laboratorios para la producción de cocaína, habilitar áreas más extensas para la minería y favorecer el tráfico de fauna silvestre. "Todo esto ha dejado como gran víctima el medio ambiente" (Molina-Orjuela et al., 2022, p. 5). Y, para el caso del departamento de Caquetá, el panorama es igual de preocupante. Según reporta la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), de la Embajada de Noruega, en el área monitoreada el municipio de San Vicente del Caguán es el más deforestado y, específicamente, varios resguardos indígenas han visto una reducción de su territorio por la deforestación causada por los grupos armados organizados que azotan el departamento (Molina-Orjuela et al., 2022).

A grandes rasgos, este panorama incidió en la gesta de las organizaciones sociales en medio de la guerra que ha vivido el departamento de Caquetá, cuyos habitantes han experimentado las consecuencias del conflicto desde una lógica de resistencia y han aportado a la construcción de un territorio a partir de referentes culturales y ambientales, valores y principios que destacan la punjanza, la resiliencia y la capacidad de adaptación de la región, a pesar de los desplazamientos, las amenazas, la presencia de grupos armados y el auge de la economía de la coca, factores que consolidaron el fortalecimiento y la reor-

ganización de procesos sociales en algunos sectores del departamento, como la zona norte y sur.

El fenómeno de la deforestación y sus efectos en la degradación ambiental han empujado a las personas a desplazarse por el departamento, ocupando nuevos terrenos para suplir sus necesidades básicas. Por ello, han tenido que seguir deteriorando el medio ambiente a fin de poder satisfacerlas. Y, sumada la necesidad de hacer frente a los problemas relacionados con el conflicto armado, las comunidades han creado organizaciones sociales como forma de resistencia, en defensa y a favor tanto del medio ambiente como de sus derechos fundamentales (Molina-Orjuela et al., 2022).

Entre algunos casos de referencia, se identifican las organizaciones de San Vicente del Caguán, sobre todo en el sector del Pato, donde colonos y colonas se movilizaron para reconocer los esfuerzos y procesos adelantados por otros paisanos desplazados en acciones bélicas en la década de los ochenta y posteriores. Este proceso suscitó que parte de la población se fuera hacia Cartagena del Chirá, dando pie a lo que se conoció como la colonización cocalera (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017). Este tránsito y dinámica social incentivó la organización comunitaria en este sector, ya que se consolidaron juntas de acción comunal (Asojuntas) y núcleos veredales que permitieron regular la población externa que llegaba a la zona por el boom de la coca y fortalecer los procesos internos y de gestión, creando apuestas de liderazgo territorial a través del ejercicio político, como el partido de la Unión Patriótica, y nuevas apuestas económicas para la región, como la extracción de madera. Esto expandió no solo la frontera agrícola, sino también nuevos asentamientos para la colonización y el poblamiento de zonas apartadas en las selvas de Caquetá (CNMH, 2017).

Cabe decir que estos procesos tuvieron repercusiones negativas a nivel social, ambiental y en el manejo del territorio, y que, con el paso del tiempo, se fueron creando a nivel nacional acuerdos para dar un mejor manejo al territorio y para sustituir cultivos de uso ilícito por procesos legales que aportaran a la construcción de un territorio con una proyección diferente a lo ilegal. Sin embargo, el conflicto armado seguía siendo una variable latente que afectaba el territorio con acciones

bélicas, controles territoriales, hechos violentos e intentos fallidos de negociaciones entre el gobierno y los grupos armados. Esto creó perspectivas distintas frente a la manera de asumir el conflicto: mientras que en la zona norte las organizaciones sociales tuvieron un proceso de resistencia más organizado para sobrevivir a los diferentes hechos de violencia, en la zona sur fue más complejo articularse para resistir ante la economía cocalera y la presencia de grupos armados que fueron llegando para instalarse con el propósito de tener un control territorial del narcotráfico. Desde una perspectiva geográfica, "el sur del departamento tiene una dotación de infraestructura más eficiente y tiene menos zonas aisladas, lo que permite que pueda ser copada militarmente con facilidad. La zona norte del departamento tiene muchas zonas aisladas y selva virgen, y es un territorio mucho más vasto" (CNMH, 2017, p. 94).

Esta breve contextualización sobre el conflicto armado en el departamento de Caquetá y las organizaciones sociales permite identificar aspectos relevantes del territorio, sus recursos y la justicia social. En ese sentido, reconocer el contexto histórico de colonización, que, si bien planteaba nuevas oportunidades de vida para los colonos, también acogía a población afectada por la violencia, constituye un trasfondo económico y social que propició el surgimiento de economías ilícitas y un uso específico del territorio. Por otro lado, Caquetá resulta ser un espacio aislado del centro del país, con poca presencia institucional, de tal manera que se consolida como un refugio estratégico para los grupos armados ilegales, como las FARC-EP y los paramilitares, y una fuente de financiación para el narcotráfico, que tiene una incidencia considerable en las organizaciones sociales tanto por los hechos de violencia como por la resistencia y el fomento de la organización.

Si bien los procesos de resistencia han tenido diferencias según la zona del departamento donde se gestaron, como es el caso la zona norte y la zona sur, las organizaciones sociales representan actores clave para aportar a la comprensión del territorio, su historia y su contribución a la construcción de paz, lo que implica realizar esfuerzos considerables para forjar un territorio más justo y equitativo.

Una perspectiva desde la gobernanza a partir de las organizaciones sociales de base

En los países considerados en vías de desarrollo, y especialmente en América Latina, existen varios discursos sobre la gobernanza territorial y la disponibilidad de las organizaciones sociales para crear sus propias acciones comunitarias en pro de una propuesta común y humana del desarrollo. Al margen de estos procesos, se fueron alineando nuevas definiciones de gobernanza, que partían de entender que, en este contexto, la gobernanza se refiere a los procesos, estructuras y prácticas que facilitan la toma de decisiones en la gestión del territorio, garantizando la inclusión, la transparencia y la transformación del territorio. Según James E. Austin, profesor emérito de la Universidad de Harvard, manifiesta que "las alianzas y la capacidad de gestión entre las organizaciones sociales de base, moviliza recursos y construye redes de articulación" (Romero et al., 2005, p. 208). Este enfoque nos convoca a entender que la gobernanza no es solo una cuestión interna, sino también un proceso de interacción con el entorno.

Desde esta perspectiva, las OSB en el departamento de Caquetá se centran en tomar e implementar decisiones en cada una de las comunidades para crear procesos que involucren actores, considerando sus múltiples intereses y perspectivas. Es así como líderes comunales, políticos, asociaciones campesinas, productores, familias ganaderas y ciudadanos se organizan participativamente, y logran la implementación de políticas y programas que aportan soluciones conjuntas y sostenibles a problemas complejos.

Además, se enfocan en mejorar la eficacia y la eficiencia de esta toma de decisiones. Para ello, las organizaciones cuentan con información y capacidad de gestión; es por ello que muchos proyectos buscan fortalecer las capacidades de las comunidades para una buena gobernanza. Este proceso puede ocurrir en diferentes niveles, desde el local hasta el internacional, y puede abarcar temas como la política económica, el manejo de los recursos socioambientales y la seguridad alimentaria, entre otros. Muestra de ello es la apuesta común que tienen las asociaciones campesinas de Caquetá por contribuir a la con-

servación de los bosques amazónicos y su biodiversidad, a partir de buenas prácticas ganaderas y la siembra de más de 63 000 árboles con medidas de adaptación al cambio climático (Programa Colombia Sostenible, 2024).

Sin embargo, estos procesos se ven desacelerados a causa del conflicto armado en la región. Espinosa (2023) señala que la violencia y la falta de soberanía en regiones como la Sierra de la Macarena han complicado la relación entre las organizaciones sociales y el medio ambiente. A pesar de los esfuerzos de estas organizaciones para promover la conservación y la gestión sostenible del medio ambiente, la militarización de la respuesta estatal y la presencia de actores armados ilegales han dificultado la implementación efectiva de políticas ambientales y el quehacer propio de las OSB que se encuentran en esa región.

A pesar de lo anterior, varios autores resaltan que es importante fortalecer los procesos de gobernanza desde una perspectiva medioambiental en la que se pueda proteger a los defensores del medio ambiente, garantizar la participación efectiva de las comunidades en la toma de decisiones (Pérez Niño, 2021), integrar sus necesidades, prevenir nuevas violencias y construir paz, apostando por una participación democrática en el medio ambiente (Espinosa Menéndez, 2023), y fomentando la reparación ecológica de los ecosistemas dañados por la extracción, la deforestación, los cultivos ilícitos y la degradación del medio ambiente (Molina-Orjuela et al., 2016).

En este sentido, el desarrollo de capacidades es esencial. Como señala la académica Mary E. Richmond, el fortalecimiento de las capacidades organizativas es fundamental para lograr una gobernanza significativa en las regiones, en especial donde el Estado no implementa estrategias de desarrollo (2005). Esto implica no solo capacitación en habilidades técnicas, sino también en la creación de un liderazgo participativo y ético. Estas perspectivas sobre el liderazgo de nuevos sujetos sociales, en el rol de propiciar la democracia participativa, se evidenciaron también en el contexto internacional desde las propuestas de Jordi Borja, para quien la descentralización político-administrativa del Estado era la única salida posible para el reconocimiento de los nuevos actores locales

que exigían una mejor y mayor participación y autonomía en las decisiones regionales y locales (1989, p. 65).

A partir de estas ideas, se ha comenzado a valorar las organizaciones sociales para la gestión del desarrollo, que luchan por la formación de sujetos sociales y por la conformación de procesos colectivos locales más participativos, legítimos, sostenibles y sustentables en los territorios. Con ello, se promueve un enfoque más inclusivo y representativo de la identidad local y comunitaria para lograr un empoderamiento de los derechos y la justicia social.

Asimismo, la gobernanza de las organizaciones sociales permite a las comunidades tener un rol activo en la transformación de las necesidades y potencialidades de los territorios. Teorías como las de Elinor Ostrom y Michel Foucault muestran que estas organizaciones pueden contribuir a una gobernanza más equitativa y participativa, ya sea mediante la gestión sostenible de sus recursos sin necesidad de intervención estatal o privatización, o en espacios donde se desafían y se reconfiguran las relaciones de poder.

Experiencias significativas desde las OSB

En este contexto, diferentes OSB se han consolidado en el Caquetá como una forma de gobernanza y gestión territorial frente al Estado y a quienes han generado el conflicto; estos últimos, con una incidencia armada y económica. Estas organizaciones sostienen su capacidad de pactos en la representatividad de familias campesinas, indígenas, afros, mujeres y jóvenes, que, en los últimos veinte años, han levantado su voz y liderazgo con iniciativas de transformación social, pero también como respuesta pacífica a los diferentes escenarios de descomposición social y marginalidad que han afrontado durante muchos años el territorio caqueteño.

Dentro de estas OSB se encuentra la Asociación de Jóvenes por Rionegro (Asojorío), un colectivo conformado por quince niños, niñas y jóvenes del corregimiento de Rionegro, municipio de Puerto Rico, ubicado al norte de Caquetá. Desde el 2012, este grupo de jóvenes tomó la firme decisión de organizarse

y proponer, desde la gobernanza, escenarios distintos a los que su contexto les ofrece, luchando contra la indiferencia de varios gobiernos municipales, la falta de recursos económicos y la incredulidad de los adultos, referida como "la generación de cristal".

La historia de la Asojorio tiene su origen en las conversaciones en el río Guayas y en las fogatas donde se encontraban varios de los jóvenes del corregimiento, quienes, a mediados de 2012, hicieron uso de la comunicación para aportar al desarrollo y al mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad rionegrense, creando escenarios como la pintura, el cine y la fotografía, para que la comunidad rionegrense cuente con espacios culturales que aportan a la solución de problemas locales del mismo corregimiento. Asojorio se ha convertido en una experiencia de comunicación dinamizada por jóvenes, quienes, hoy en día, presencian situaciones de violencia y destapan el lente de las cámaras para ser escuchados y visibilizados.

Asojorio ha avanzado en la consolidación de un colectivo cohesionado y dinámico, y sus integrantes han logrado incidir en el territorio, como también respetados por diversos actores legales e ilegales de la región. Todo ello gracias a las acciones comunitarias y comunicativas que sostienen el trabajo articulado con actores clave del corregimiento de Rionegro, así como con otras OSB y la misma institucionalidad.

Es así como surgió la Casa de los Murales, una iniciativa que Asojorio implementó a partir de los escombros y el doloroso recuerdo de la guerra vivida en el corregimiento de Rionegro. Este proceso, denominado "Arte para la resiliencia", tuvo acompañamiento de varias organizaciones amigas, tales como la Escuela Audiovisual Infantil de Belén de los Andaquíes y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

De igual forma, y debido al fortalecimiento de capacidades y alianzas para la gestión de recursos, Asojorio cuenta con un recinto donde los jóvenes se encuentran diariamente para interactuar entre sí, planificar las actividades, tomar

decisiones y hacer gestión territorial. Asimismo, para actualizar la página oficial de la Asociación (<https://asojorio.redhumus.org/>), un espacio virtual consolidado como el diario de campo de las iniciativas del colectivo. Adicionalmente, cuenta con un canal en YouTube donde se publicó la primera pieza audiovisual "Talento Rionegro Caquetá", producida por los jóvenes de Asojorio como una muestra del trabajo colaborativo. Las redes sociales son su fuerte; Facebook e Instagram reúnen seguidores que llevan a replicar su trabajo ante el mundo, creando impacto sobre sus prácticas comunicativas que aportan al desarrollo y al mejoramiento de las condiciones de vida en la región caqueteña.

Recurriendo a lo planteado por Gumucio Dagron (2005, p. 3), "la sostenibilidad en los colectivos de comunicación es un arte de equilibristas, porque es uno de los temas que pone a estos procesos en la cuerda floja. Por ser con énfasis social, se considera común que su trabajo debe ser gratuito, situación que lleva a que muchas experiencias no logren mantenerse". Sin embargo, no es solo la sostenibilidad económica la que se tiene en cuenta en las prácticas comunitarias, sino también otras alternativas sostenibles que algunos académicos mencionan, como la sostenibilidad cultural y la sostenibilidad social y política. La sostenibilidad social se enfoca en la creación de la experiencia comunicativa, sus socios y beneficiarios. La sostenibilidad política se suscita cuando las experiencias de comunicación no son parciales y su fin es comunitario, y la cultural se centra en priorizar los intereses colectivos y ambientales para aportar desde el arte a la transformación del territorio. Por su parte, Asojorio ha implementado iniciativas apoyadas por organizaciones amigas, como ACNUR, la Fundación Yapawayra y la Fundación Mambe. Una estrategia que da muestra de esto es el Festival Río Paz, un encuentro cálido y solidario de resignificación de las memorias y el territorio en el que diversidad de actores y culturas se reúnen e intercambian experiencias y saberes en torno a la construcción de paz. Anualmente, los jóvenes de Asojorio, en el corregimiento de Rionegro, cuentan con un escenario donde se resignifica la memoria de aquellos que perdieron la vida en el marco del conflicto armado. Estas asociaciones juveniles en Caquetá son pioneros en este tipo de iniciativas. Hasta la fecha, han realizado doce versiones del Festival (Asojorio, 2021).

Otra de las OSB es la Corporación Manigua: Tejiendo Amazonía por la Vida, una organización de la sociedad civil surgida en 2006. Tiene como misión "el cuidado de la vida como base de la identidad cultural para la sustentabilidad humana, mediante procesos participativos de formación, producción e investigación en el territorio amazónico" Corporación Manigua (Corpomanigua, s.f.) y, en sus casi 18 años de existencia, ha realizado diversas intervenciones en el departamento de Caquetá a través de proyectos sociales financiados con recursos propios o de cooperación, los cuales han contribuido a la identificación de capacidades en las comunidades y al fomento de la gestión del territorio para contar con mejores condiciones de vida.

A lo largo de su existencia, Corpomanigua ha trabajado con niños, niñas, jóvenes, mujeres y comunidades de colonos e indígenas, quienes, por diversas situaciones del conflicto armado o emergencias, se han desplazado de sus territorios de origen o han estado en altos niveles de vulnerabilidad, llegando a asentarse en Caquetá en busca de oportunidades de bienestar, participación, refugio o protección. De igual manera, la corporación ha gestionado programas para hacer presencia en zonas rurales y urbanas del departamento. El primero de ellos está relacionado con la seguridad, la soberanía y la autonomía alimentaria, que impulsa procesos asociativos para una economía más justa y equitativa y apuesta por la conservación del medio ambiente y la Amazonía. El segundo tiene que ver con derechos y ciudadanía, que promueve relaciones basadas en la equidad, la igualdad de oportunidades y derechos de hombres y mujeres, la recuperación de la memoria individual y colectiva, la participación, la incidencia y el empoderamiento político, económico y cultural para la disminución de las violencias basadas en género (Corpomanigua, s.f.).

Los diversos procesos que ha adelantado esta organización evidencian que la gobernanza se vincula con la participación comunitaria. Esta se consolida como una apuesta significativa para la toma de decisiones y para acceder a información que permita gestionar capacidades. En este sentido, el conocimiento del territorio refleja la importancia de estar activos y presentes en los diversos espacios de construcción, incluso para posicionar procesos de empoderamiento, resiliencia comunitaria y co-responsabilidad entre los actores involucrados en las dinámicas de los territorios.

Reflexiones y conclusiones

Las organizaciones sociales de base desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de la justicia socioambiental. Preciado Coronado (2021) ofrece una mirada política sobre el territorio como un espacio y lugar de pertenencia que es históricamente transformado y que solo aquellos movimientos que luchan por bienes comunes territorializados pueden ofrecer una alternativa de gobierno autónomo. Lo anterior indica que las movilizaciones mencionadas en Caquetá han trascendido las relaciones de poder, cuestionando la forma de gobernanza local, regional y nacional, en defensa de sus derechos y actuando como agentes de cambio en la búsqueda de un equilibrio entre el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental.

Los procesos de gobernanza se articulan necesariamente con el rol de la ciudadanía, lo que implica un potencial transformador para incidir en lo público, exigir los derechos y conocer los deberes desde los territorios. La articulación entre estas dinámicas refleja cohesión e inclusión social y valora la diversidad, los saberes propios y las capacidades de las comunidades en los territorios frente a las situaciones socioambientales a las que se ven expuestas.

De igual manera, las organizaciones sociales de base son un punto de partida para dinamizar y gestionar procesos territoriales que involucran una visión territorial desde el ser y el sentir, haciéndolas partícipes en la toma de decisiones. Esto representa un ejercicio político para incidir en la construcción de una justicia socioambiental efectiva que involucre tanto los derechos de las comunidades como las características del territorio.

Finalmente, este ejercicio es una aproximación a las posibilidades que representan las organizaciones sociales de base en los territorios para impulsar procesos territoriales más equitativos, asequibles y justos, en los que se puedan tomar decisiones más acertadas respecto a los contextos de las comunidades. Además, esta reflexión aporta elementos para que las comunidades logren organizarse, identificar necesidades y formular posibles soluciones a problemas sociales y ambientales de su territorio.

Referencias bibliográficas

Asociación de Jóvenes por Rionegro. (2021). *Festival Riopaz. Asojorio*. <https://asojorio.redhumus.org/festival-riopaz/>

Borja, J. (1989). *Estado, descentralización y democracia*. Foro Nacional por Colombia.

Calderón Rojas, J. (2016). *Etapas del conflicto armado en Colombia: Hacia el posconflicto. Latinoamérica. Revista de estudios Latinoamericanos*, 62, 227-257.

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2017). *La tierra no basta: Colonización, baldíos, conflicto y organizaciones sociales en el Caquetá*. Banco de la República. <https://babel.banrepultural.org/digital/collection/p17054coll2/id/97/>

Corporación Manigua. (s. f.). *Lo que somos*. Corporación Manigua. <https://www.corporacionmanigua.org/lo-que-somos/>

Espinosa Menéndez, N. (2023). *Gobernanza ambiental sin soberanía: Postconflicto, violencia y la conservación siempre aplazada de la Sierra de La Macarena*. *El Ágora USB*, 23(2), 375-398. <https://doi.org/10.21500/16578031.6733>

Fundación Ideas para la Paz. (2014, junio 14). *Conflictos armados en Caquetá y Putumayo y su impacto humanitario*. Fundación Ideas para la Paz (FIP). <https://ideaspaz.org/publicaciones/investigaciones-analisis/2014-07/conflictos-armados-en-caquetá-y-putumayo-y-su-impacto-humanitario>

García Montes, C. E., & Santanilla Ramírez, E. (1994). *Belén de los Andes: recuperación histórica y análisis cultural* / Carlos Elías García Montes, Eulise Santanilla Ramírez. Universidad Pedagógica Nacional, Cinde, Maestría en Desarrollo Educativo y Social,.

Gobierno de Colombia y FARC-EP. (2016). *Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)*. <https://www.jep.gov.co:443/Normativa/Paginas/Acuerdo-Final.aspx>

Gumucio Dagron, A. (2005). *Arte de equilibristas: La sostenibilidad de los medios de comunicación comunitarios*. Punto Cero: Revista de investigación científica, 10(10), 6-19.

Jaramillo, J., Mora, L., & Cubides, F. (1989). *Colonización, coca y guerrilla*. Alianza Editorial Colombiana.

Molina Orjuela, D. E., Molina, A. M., & Rodríguez Caldera, E. S. (2016). *Gobernanza ambiental y posconflicto en Colombia*. VIII Congreso de Relaciones Internacionales (La Plata, 2016). <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/58151>

Molina-Orjuela, D. E., Chavarro-Ospina, S. G., & Guzmán-Alvarado, B. O. (2022). *Impactos del conflicto armado colombiano sobre el medio ambiente y acciones para su efectiva reparación*. Revista Científica General José María Córdova, 20(40), 1087-1103. <https://doi.org/10.21830/19006586.1129>

Pérez Niño, W. (2021). *Gobernanza ambiental y transformación social en Colombia. Jurídicas*, 18(2), 281-296. <https://doi.org/10.17151/jurid.2021.18.2.16>

Preciado Coronado, J. A. (2021). *Justicia (socio)ambiental y territorios de lo común. Entre la gobernanza de las instituciones locales y nacionales, y las autonomías comunitarias. El caso de México. En Allin Kamachikuq, defensa de los bienes comunes. En clave Abya Yala de la Colección de Estudios en Derechos Humanos: Vol. Tomo XVIII. Comisión Estatal de Derechos Humanos.*

Programa Colombia Sostenible. (2024, 16 de mayo). *Familias campesinas en Caquetá promueven la reconversión ganadera para combatir la deforestación*. <https://www.colombiasostenible.gov.co/programa/2024/05/16/familias-campesinas-en-caqueta-promueven-la-reconversion-ganadera-para-combatir-la-deforestacion/>

Richmond, M. (2005). *Diagnóstico social. Siglo XXI Editores de España. (Obra original publicada en 1917)*.

Romero, C., Berger, G., Ickis, J. C., Lozano, G., Roitter, M., Pires, J. T., Ogliastri, E., Maass, A., Koljatic, M., Gutiérrez, R., Silva, M., Lobo, I. D., Reficco, E., Trujillo, D., Pérez, F., Herrero, G., Austin, J., Casado, T., & Fischer, R. M. (2005). *Alianzas sociales en América Latina: Enseñanzas extraídas de colaboraciones entre el sector privado y organizaciones de la sociedad civil*. Inter-American Development Bank. <https://doi.org/10.18235/0012473>